

Options of all colors: 2019 Elections will have a record number of political parties

 lapalabra.gt/opciones-de-todos-colores-elecciones-2019-tendra-cifra-record-de-partidos-politicos

21 de abril de 2019

The political offer in Guatemala will have 24 possible presidential binomials, to this would be added civic committees and other associations that would enter the legislative, municipal and Central American Parliament. This speaks of a political pluralism without major precedents in the region. But what does this mean for Guatemala? Have many "new" options or have few parties with solid bases that have cohesion within their agenda?

In 1984, a new political Constitution was adopted in Guatemala, marking the beginning of free and open elections in the country. Although the strengthening of political institutions in the country has shown little progress in accountability and transparency during this new democratic era (taking into account that 4 of the last 6 presidents have been accused or convicted in high corruption cases) profile), in Guatemala, after the Peace Accords, a highly dynamic multiparty system emerged.

The data suggests that the electoral behavior of Guatemalans is linked to the disappearance of political parties.

Using a series of surveys conducted by the Public Opinion Project of Latin America (LAPOP) between 2004 and 2017, they expressed a series of notable findings that characterize the behavior of the Guatemalan electorate.

Of the more than eight thousand cases tabulated by LAPOP in its seven iterations between 2004 and 2017, only 12% of the Guatemalan respondents said they felt represented by political parties. Renzo Rosal, political scientist, affirms that political parties are indispensable for the functioning of a democratic political system since they restrain the elected official, give voice to the opposition, and develop a culture of political competition.

In Latin America, the electoral results show a lack of confidence in assigning command to a single party or coalition, which makes the complex and difficult task of building political majorities difficult.

For Rosal, it has long been considered that a strong party system is crucial for the government's capacity. In the works of pioneering researchers of the IDB and a few external collaborators, carried out in the early 2000s, it was considered that in this system there would normally be a small number of well-organized and programmatic (and ideological) parties, that is, with well-established convictions.) that would persist over time and that would represent relatively consistent policy positions. These parties, which were considered highly institutionalized, would increase democratic accountability and, in addition, help to ensure that important policies survive the changes of government.

El mapa político regional (América Latina) ha cambiado de manera importante desde 1990. Si antes de esa fecha, en



lo político el debate era democracia o dictaduras, en la última década y media ha sido democracia representativa versus democracia participativa. Según Eduardo Castillo, experto en Marketing Político, el desarrollo de la gobernabilidad democrática requiere de ambas. En lo económico, el debate inicial fue sobre rol del Estado versus rol del mercado libre. En la actualidad, existe un importante consenso en torno a las claves de un modelo de desarrollo que, sin abandonar el crecimiento y la producción, refuerza el rol del Estado y las políticas sociales para superar la pobreza.

Los cambios se han sucedido con rapidez en América Latina, donde la democracia electoral está consolidada (en la mayor parte de la región). La política es importante y los actores políticos son estratégicos. Sin embargo, para Renzo Rosal estos avances en las democracias latinoamericanas pueden retroceder si no se refuerza la cultura política, las formas y prácticas de la democracia misma. La democracia de ciudadanos tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, más la democracia no se reduce a la celebración de elecciones; también implica el ejercicio de una ciudadanía integral, política, civil, social y económica; con participación efectiva. Sin lo anterior la gobernabilidad y la convivencia democrática se ven comprometidas.

En América Latina, los resultados electorales evidencian la desconfianza en ceder el mando a un solo partido o coalición, lo que dificulta la tarea compleja y difícil de construir mayorías políticas. La región requiere reconstituir pactos sociales nacionales que le garanticen estabilidad y le permitan mejorar las oportunidades para la gobernabilidad democrática. Asimismo, las fracturas y las polarizaciones presentes en la mayoría de los países de la región dificultan la labor gubernamental y la posibilidad de generar las condiciones para ejercer los derechos ciudadanos y efectivizar una ciudadanía tanto política, como económica y social.

En este marco, los resultados electorales efectuados entre los años 2013 y 2015, muestran las grandes divisiones dentro de cada país, entre el norte y el sur, entre la capital y la periferia, entre la meseta y el llano, entre la costa y la sierra. Prácticamente en todas partes el

descontento de los ciudadanos con ciertas formas de hacer política se expresa en desafección e incremento del abstencionismo.

Los congresos se encuentran divididos y sin mayorías claras. La excepción es el caso de Ecuador donde el partido de Gobierno posee casi el 90% de los escaños parlamentarios. Esto obliga en toda la región a una negociación constante, que muchas veces no da resultados y empantana el sistema político. Así, los gobernantes mandan por decreto, lo que genera un mayor desapego ciudadano hacia las instituciones democráticas.

” significa que los partidos políticos no representan las preferencias de los votantes en materia de políticas. Más bien, tienden a valerse de promesas clientelistas y están al servicio de aquellos que ponen el dinero”, afirma Rosal.

Además, encuentran crecientes dificultades para implementar sus propuestas. Todo esto muchas veces estimula la corrupción, percibida como un “camino fácil” para intentar resolver estas dificultades, lo cual sólo contribuye a agravar la situación. Renzo Rosal explica que es necesario, entonces, diseñar mecanismos para la construcción de acuerdos nacionales efectivos, capaces de reflejar la pluralidad de la sociedad en el marco de una democracia guiada por las mayorías, pero que respete a las minorías.



Para el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, el desafío actual, en un contexto de mayor autonomía política y espacios de relación económica internacional, es avanzar en modelos desarrollo que permitan el crecimiento para superar la pobreza.

Los estudios sobre América Latina concluyen que en la actualidad existe un fuerte apoyo a la democracia en la región. De acuerdo al Informe de Latinobarómetro, para el año 2013, este apoyo fue de 56%. A pesar de ello, registran también un nivel casi equivalente de insatisfacción con los resultados de los gobiernos democráticos, un 57% señala que no han logrado resolver las demandas de la ciudadanía. Sólo un 39% se declaró satisfecho. Las y los latinoamericanos

han reducido o perdido la confianza en los gobiernos, en los partidos políticos y en los congresos, lo cual naturalmente afecta la legitimidad de las instituciones básicas de las democracias.

“La democracia por sí misma no es capaz de garantizar el buen gobierno, aunque permite reemplazar a los malos gobernantes por medios legítimos. Las elecciones democráticas posibilitan que la ciudadanía se exprese en nuevas tendencias y construya nuevas mayorías”, explica Rosal.

En las últimas dos décadas muchos presidentes latinoamericanos han sido reemplazados fuera de los marcos electorales, lo cual revela un cuadro complejo de gobernabilidad. Esto no es nuevo en la región. Se trata de una realidad que se ha prolongado durante años. Desde 1991 encontramos 16 presidentes que han renunciado antes de concluir su mandato.

En todos los casos, los reemplazos se efectuaron manteniendo un cierto apego a las normas constitucionales, evitando, de esta manera, las sanciones por parte de la comunidad internacional. “Si queremos entender estas inestabilidades, es preciso mirar los sistemas políticos. En general, en América Latina, a diferencia del Caribe, prevalecen los regímenes presidenciales, es decir, sistemas en los cuales la figura del Jefe de Estado es crucial”, comenta Rosal.

Las constituciones nacionales ubican al presidente en el centro del poder, con extensas facultades, pero en muchos países ocurre que el presidente no cuenta con mayoría en el Congreso. A lo largo de la historia latinoamericana, esta situación generó tensiones políticas que fueron resueltas por la intervención, abierta o encubierta, de diversos poderes fácticos, principalmente las Fuerzas Armadas. En la actualidad esto no es posible. El consenso democrático en la región es fuerte, por lo que romper el marco constitucional lleva al aislamiento político-diplomático y puede generar fuertes sanciones económicas.

En el caso de Guatemala la condición que genera esa división en el congreso es el sistema de partidos. Para Eduardo



Castillo es uno de los que tienen la base institucional más débil de toda América Latina; la antigüedad promedio de un partido político es de solo seis años, y hay más de una docena de partidos que compiten en cada elección, la mayoría de los cuales representan poco o nada en términos de ideología. En efecto, desde la vuelta a la democracia en 1985, no hay ningún partido político que haya ocupado dos veces el sillón presidencial. Muchos de ellos, entre los que se cuentan los dos más grandes a partir de 1999, han desaparecido del todo (FRG y Partido Patriota).

A pesar de esto, La Carta Democrática de las Américas y las cláusulas democráticas incluidas en los pactos subregionales han contribuido de manera fundamental a evitar los regímenes autoritarios. Aunque, por sí mismos, estos acuerdos no logran otorgar estabilidad y gobernabilidad democrática, poseen una importante función de reaseguro democrático, al proyectar incentivos positivos para superar tensiones y evitar rupturas constitucionales.

Los sistemas políticos latinoamericanos han caído en las decisiones de corto plazo, que demuestran incapacidad para establecer políticas de Estado y construir mayorías estables que les den sustento. Es decir, fijar políticas que puedan proyectarse más allá de un período de gestión gubernamental y que sean más incluyentes que las opciones del partido o la coalición que se encuentra en el Gobierno.

Para Guatemala el carácter transitorio y la falta de ideas, dan a entender que los legisladores a menudo cambian de afiliación política durante su carrera. Y lo que es aún más importante: ..." significa que los partidos políticos no representan las preferencias de los votantes en materia de políticas. Más bien, tienden a valerse de promesas clientelistas y están al servicio de aquellos que ponen el dinero", afirma Rosal.

Por ello es necesario generar acuerdos, pactos, alianzas que incorporen a la oposición, a diferentes referentes minoritarios y organizaciones de la sociedad.

Hablamos de políticas permanentes, a las que se les destinen los recursos humanos y financieros necesarios para su ejecución, que sean diseñadas y ejecutadas con una participación amplia de la ciudadanía, lo que les augura continuidad y fortalecimiento en el largo plazo.